



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Miguel Augusto Jaramillo de los Ríos
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-005-2020-00393
TEMA	Reliquidación pensional – ley 33 de 1985
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia

El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA y GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 047** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MIGUEL AUGUSTO JARAMILLO DE LOS RÍOS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado **05-001-31-05-005-2020-00393**.

• PRETENSIONES:

El demandante pretende se reconozca y pague la pensión de vejez en aplicación de la ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición, junto con las mesadas ordinarias y adicionales con los respectivos reajustes, intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas procesales.

• HECHOS:

Como fundamento de las pretensiones indicó que nació el 15 de junio de 1958. Que es beneficiario del régimen de transición por el contar con 750 semanas de cotización al 1° de abril de 1994. Que prestó sus servicios a la entidad PROSOCIAL, la cual es una entidad pública a nivel nacional adscrita al

Ministerio del Trabajo, desde el 1° de agosto de 1979 hasta el 29 de febrero de 2000, reuniendo un total de 1.044 semanas. Que presentó solicitud para el reconocimiento pensional el 9 de junio de 2014, la cual fue negada por la accionada, indicando que no reunía los requisitos del régimen de transición, y que debía cumplir los requisitos de la ley 797 de 2003. Que siguió efectuando cotizaciones a pensiones, pero bajo el régimen subsidiado por no volver a conseguir empleo, después de su desvinculación con PROSOCIAL. Que en total cotizó 1.310 semanas. Y que solicitó la pensión de vejez nuevamente, la cual fue negada por no cumplir los 60 años de edad, exigidos por el decreto 758 de 1990, sin tener en cuenta que reunía los requisitos de la ley 33 de 1985.

- **CONTESTACIÓN:**

- ✓ COLPENSIONES:

Una vez notificada en debida forma la demanda a la entidad accionada señaló en su contestación que es cierta la edad. Que no es cierto que es beneficiario del régimen de transición. Que es cierto que prestó sus servicios para la empresa PROSOCIAL, pero que se sujetan a las semanas señaladas en la historia laboral. Que se tomará como cierto si se prueba que la entidad PROSOCIAL es una entidad pública. Que es cierto que solicitó la pensión de vejez, pero no es cierto que cumpla los requisitos pensionales. Que es cierto el contenido de las resoluciones. Que no le consta las situaciones personales del demandante. Que el actor no demostró su calidad de servidor público. Que al demandante se le estudio la pensión en aplicación del decreto 758 de 1990, pero no cumplió el requisito de la edad. Y que no es cierto que Colpensiones esté en mora en el reconocimiento de las mesadas pensionales. Se opuso a todas las pretensiones. Y propuso varias excepciones de mérito como son la de prescripción, compensación, entre otras.

- **SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA:**

El 27 de julio de 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, dictó sentencia, en donde **DECLARÓ** que hay lugar reliquidar la pensión de vejez que viene disfrutando el demandante, con base en los parámetros del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, en concordancia con la ley 33 de 1985.

Como argumento de su decisión, expuso que el actor contaba con 750 semanas al 1° de abril de 1994, lo que equivale a 15 años de servicio, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición.

Como consecuencia, **CONDENÓ a COLPENSIONES**, a que una vez alcance la ejecutoria la presente providencia, reconozca y pague al demandante, el retroactivo pensional en la suma de **\$19'925.329**, por el mayor valor adeudado en las mesadas pensionales comprendidas entre el 1° de noviembre de 2019 al 31 de julio de 2022, suma sobre la cual proceden los descuentos en salud y las cuales deben ser pagadas de manera indexada.

CONDENÓ a COLPENSIONES, a que una vez alcance la ejecutoria la presente providencia, continúe reconociendo y pagando al actor, la pensión de vejez teniendo como mesada pensional para el año 2022, la suma de \$1'315.590, y sobre esta mesada procederán los descuentos en salud y operan los incrementos leales de ley.

DECLARÓ prospera la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer los intereses moratorios, por obrar acorde a la normatividad vigente, y la improsperidad de los demás.

Y, **CONDENÓ** en costas a COLPENSIONES.

- **APELACIÓN:**

✓ DEMANDANTE:

La apoderada del demandante presentó su inconformidad manifestando que lo perseguido es el reconocimiento pensional bajo la ley 33 de 1985, ya que el demandante nació el 15 de junio de 1958, por lo que tendría derecho a la pensión cuando cumplió los 55 años de edad, esto es el mismo día y mes del año 2013, debiéndose reconocer las mesadas pensionales desde el año 2013, hasta que fue reconocida la prestación por parte de la entidad accionada, y que de ahí en adelante se aplicara la reliquidación de las mesadas en virtud de lo dispuesto en la ley 33 de 1985. Que no está de acuerdo cuando el juez reliquida la pensión desde el mes de noviembre de 2019, ya que no se declaró

probada la excepción de prescripción, y más aún cuando fue solicita la prestación en vigencia de la ley 33 de 1985. Por lo que solicita se revise la fecha en que se debe dar el reconocimiento de la pensión de vejez, ya que el demandante contaba con la edad y con el tiempo de servicio ante la entidad pública. Y que se debió condenar a los intereses moratorios, ya que en sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia como lo es la de radicado 3130 de 2020, expresa que es procedente cobrar los intereses moratorios a los pensionados que se les aplica el régimen de transición, otorgándose estos por el retardo injustificado de su pensión.

✓ COLPENSIONES:

La apoderada de la entidad, expuso que se adhiere a los alegatos realizados en primera instancia, en donde señaló que el demandante no es beneficiario del régimen de transición para que se le aplique la ley 33 de 1985, por no dejar acreditada la calidad de servidor judicial, como tampoco se le debe aplicar el decreto 758 de 1990. Y que en el evento que se confirme la sentencia, se revisen los cálculos realizados en pro de la entidad accionada.

De igual forma, la anterior decisión se revisará en **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** con ocasión de las condenas impuestas a COLPENSIONES.

• **ALEGATOS:**

✓ COLPENSIONES:

La entidad accionada manifestó en sus alegatos que se debe revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que el demandante actualmente disfruta de una pensión reconocida en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, y una vez realizado el estudio de reliquidación con Ley 797 de 2003, el cual es el único régimen aplicable, no genera valores a favor por lo que se debe negar la reliquidación de pensión de vejez. Y que el actor no tiene derecho al régimen de transición, y, por ende, no tiene derecho a que se reconozca pensión de vejez con Ley 33 de 1985.

✓ DEMANDANTE:

En sus alegatos expuso que el demandante es beneficiario del régimen de transición, toda vez que para 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, contaba con 750 semanas de cotización con la Entidad PROSOCIAL, cumpliendo los 55 años de edad el 15 de junio de 2013. Que el actor prestó sus servicios en la Entidad PROSOCIAL, desde el 1° de agosto de 1979 hasta el 29 de febrero de 2000, reuniendo un total de 1044 semanas, siendo esta entidad pública a nivel nacional y adscrita al Ministerio del Trabajo. Que el demandante prestó sus servicios como servidor público de la Entidad PROSOCIAL, en el cargo de Auxiliar de presupuesto, tiempo en el cual la entidad efectuó las cotizaciones al ISS hoy COLPENSIONES, tal como lo refleja la historia laboral. Y que la entidad accionada no tuvo en cuenta que el afiliado reunía todos los requisitos legales para ser beneficiario del régimen de transición, establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tener los 15 años cotizados al 1° de abril de 1.994 y contar con los 20 años de servicios con entidades del Estado y los 55 años de edad, conforme a lo establecido por la Ley 33 de 1985.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Resolución GNR 348982 del 5 de octubre de 2014, a través de la cual COLPENSIONES, niega al demandante el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por no ser beneficiario del régimen de transición y no reunir los requisitos exigidos por la ley 797 de 2003.¹
- Historia laboral aportada por la parte actora con fecha de actualización del 11 de febrero de 2020.²
- Historia laboral aportada por la parte accionada con fecha de actualización del 17 de mayo de 2022 e historia laboral tradicional.³

¹ Folios 8 a 11 de la demanda

² Folios 12 a 19

³ PDF 34 – Folios 5 y 6, y 8 a 14

- Certificado de información laboral elaborado por la entidad PROMOTORA DE VACACIONES Y RECREACIÓN SOCIAL –PROSOCIAL-, en donde se acredita la vinculación del demandante en dicha entidad en el cargo de auxiliar de presupuesto, del 1° de agosto de 1979 al 1° de marzo de 2000.⁴
- Resolución SUB 101752 del 30 de abril de 2020, por medio de la cual COLPENSIONES, indica que si bien el actor es beneficiario del régimen de transición, no cumple lo dispuesto en el decreto 758 de 1990, por lo que le negó la pensión de vejez, y se le dio la opción de seguir cotizando al sistema.⁵
- Resolución SUB 135357 del 25 de junio de 2020, COLPENSIONES, le **reconoció la pensión de vejez al demandante**, a partir del **15 de junio de 2020**, en cuantía de \$877.803, bajo lo dispuesto en la ley 797 de 2003.
- Respuesta al oficio por parte del Ministerio del Trabajo, en donde informa el detalle de los salarios devengados mes a mes por el demandante.⁶

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que las apelaciones presentadas por las partes, los **problemas jurídicos** a resolver serán determinar: **i)** si el demandante ostenta la calidad de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, para que se le de aplicación a lo dispuesto en la ley 33 de 1985; de ser procedente dicha normatividad, se estudiará, **ii)** si cumple los requisitos de ésta ley, y determinar a partir de qué fecha se debe realizar el reconocimiento de la prestación económica y revisar el cálculo de la misma; **iii)** si hay lugar a conceder los intereses moratorios; **iv)** y la condena en costas impuesta a COLPENSIONES.

i. Régimen de transición.

Para comenzar es ineludible señalar que el régimen de transición es una prerrogativa creada por el legislador para un grupo de personas que según su criterio tenían unas expectativas de adquirir su derecho pensional con el cumplimiento de los requisitos de una ley anterior, ante el surgimiento de una nueva norma, como lo dispone el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

⁴ Folios 20 a 24

⁵ Folios 26 a 30

⁶ PDF 32 y 33

Para gozar de ésta prerrogativa, el afiliado debe contar a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, al 1° de abril de 1994 o al 30 de junio de 1985, si es del sector público a nivel departamental, municipal y distrital, con más de 35 años de edad si es mujer, o 40 años si es hombre, o 15 años o más de servicios cotizados, para poder acceder a la pensión de vejez bajo el régimen de transición, y consecuentemente se le respetaría los requisitos de edad, tiempo y monto del régimen anterior al cual se encuentre afiliado.

Para el caso de autos, el demandante solicita que se le aplique lo dispuesto en la ley 33 de 1985, normatividad que exige 55 años de edad tanto para hombre y mujer, y 20 años de servicio; petición que es ajustada a derecho, toda vez que es un servidor público, como se comprueba con las certificaciones laborales incorporadas por el Ministerio del Trabajo, en donde se lee que la entidad en donde laboró el accionante era del sector público nacional.

Ahora, de la copia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía del demandante aportado al expediente administrativo e incorporado en el PDF1, se puede comprobar que éste no cumple el requisito de 40 años de edad exigido por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, toda vez que nació el 15 de junio de 1958, ostentando la edad de 36 años, al 1° de abril de 1994; sin embargo, si cuenta con 765,43 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994, y si bien esto es equivalente a más de 14.71 años de servicio, la Corte Constitucional a través de la sentencia SU-130 de 2013, para referirse al tema de la recuperación del régimen de transición, realizó una equivalencia de los 15 años de servicios con las 750 semanas cotizadas a la entrada de en vigencia del Sistema General de Pensiones, por lo que esta Sala, dando aplicación a esta interpretación más favorable bajo los principios del indubio pro operario y pro homine, se puede establecer que es beneficiario del régimen de transición para que se le de aplicación la ley 33 de 1985.

Aunado a lo anterior, a través de la resolución SUB 101752 del 30 de abril de 2020, la misma entidad accionada, señaló que el actor si era beneficiario del régimen de transición, estudiándole lo dispuesto en el decreto 758 de 1990.

No obstante, no se puede dejar de lado lo dispuesto por el acto legislativo 01 de 2005, en el párrafo transitorio 4°, el cual expresa: “...*que el régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá el régimen de transición hasta el año 2014*”; de acuerdo a esto, se hace necesario estudiar este requisitos, ya que el actor cumplió los 55 años de edad en el año 2013.

Así pues, una vez revisada la historia laboral, para la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, es decir el 25 de julio de ese mismo año, el actor contaba con más de 1.070 semanas cotizadas, por lo que puede ser considerado como beneficiario del régimen de transición hasta finales del año 2014. Por tal razón, la sentencia de primera instancia merece ser **CONFIRMADA** en este sentido.

ii. Reconocimiento pensional.

En lo que respecta al reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación de la ley 33 de 1985, revisadas en su conjunto todas las historias laborales, junto con el certificado de información laboral de los tiempos laborados en la entidad PROMOTORA DE VACACIONES Y RECREACIÓN SOCIAL –PROSOCIAL-, observa que el actor cotizó hasta el mes de **febrero del año 2000**, fecha en la cual se registró la novedad de retiro de la entidad pública, y para tal calenda, el actor contaba con un total de 1.070 semanas, que totaliza 20.57 años de servicio, cumpliendo los 55 años de edad, el 15 de junio de 2013, por lo que sin duda alguna, hay lugar al reconocimiento de la pensión de vejez, dado que se colman los requisitos de la ley 33 de 1985.

En lo que respecta a la ***fecha en que se debe reconocer la pensión de vejez***, no hay duda alguna que el actor viene disfrutando de la pensión de vejez en aplicación de la ley 797 de 2003, desde el 15 de junio de 2020, en cuantía de \$877.803, y si bien el juez de primera instancia no hizo mención a las razones del porque el reconocimiento pensional a partir del 1° de noviembre de 2019, se observa que fue con base en la figura del retiro tácito del sistema, ya que la última cotización del demandante fue para el **30 de octubre de 2019**.

En este punto, la Sala debe realizar un pronunciamiento sobre la inconformidad de la parte actora, en *el sentido de que se debe reconocer la pensión a partir del año 2013*, fecha en que cumplió los requisitos para la pensión de vejez bajo la ley 33 de 1985, lo cual no será procedente, toda vez que esta petición solo vino a ser solicitada en el recurso de apelación, ya que si se leen con detenimiento las pretensiones y hechos de la demanda, lo que se busca es la aplicación del régimen de transición, y por ende su remisión a la ley 33 de 1985 para una futura reliquidación de la pensión, sin que se reclame la inducción en error ocasionada por la entidad accionada desde el año 2013, y mucho menos se pretende que se deba conceder el derecho desde tal fecha; asimismo, se debe recordar que este cuerpo colegiado no ostenta las facultades de extra y ultrapetita que posee el juez de primera instancia para fallar más de lo pedido, ya que solo puede hacerlo cuando se estén vulnerando derechos mínimos e irrenunciables⁷ como sería el derecho a la pensión; y toda vez que lo pretendido es la reliquidación pensional, no es dable modificar la fecha del reconocimiento pensional, tal y como lo solicita la parte actora.

Ahora, en cuanto a la liquidación efectuada por el juez, observa la Sala que el actor realizó cotizaciones desde febrero de 2015 hasta el mes de octubre de 2019, bajo el régimen subsidiado, semanas que para la liquidación del IBL en aplicación de la ley 33 de 1985, deben ser tenidas en cuenta, contrario a lo realizado por el juez de primera instancia, pues así lo ha dispuesto nuestro órgano de cierre en sentencia SL3206 de 2022, en donde consagró:

Es criterio reiterado y tranquilo de esta Corporación que, si bien el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 garantiza a los beneficiarios del régimen de transición la aplicación del régimen anterior en lo relativo a la edad, tiempo de servicios o número de semanas y el monto, lo cierto es que en todo lo demás remite a «las disposiciones contenidas en la presente Ley».

Lo anterior quiere decir que el régimen de transición «no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993» (CSJ SL1981-2020), sino una regulación que hace parte del sistema de seguridad social en pensiones, a través de la cual se pretende la protección de las expectativas de un grupo poblacional que estaba próximo a adquirir la pensión y que por razón de un cambio de legislación corría el riesgo de ver frustradas esas expectativas.

(...)

⁷ Sentencia C-968 de 2003

Ahora, ya sea de la forma en que lo establece el artículo 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que ambos preceptos permiten determinar el IBL con todas las cotizaciones realizadas por el afiliado, sea en el sector público o privado. En efecto, las mencionadas disposiciones no establecen distinciones al respecto, por el contrario, habilitan la suma de todas las cotizaciones, lo cual responde a la finalidad del sistema de superar la segmentación que existía en la forma de liquidar las prestaciones:

(...)

Por otra parte, no tiene lógica que, para otros beneficiarios del régimen anterior, por ejemplo, aquellos cuyo régimen anterior sea la Ley 71 de 1988, el IBL se integre conforme a la Ley 100 de 1993, esto es, incluyendo tiempos públicos y privados, pero para los titulares de la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, se introduzcan matizaciones o distinciones no consentidas por la norma. La ley es general Radicación n.º 80992 SCLAJPT-10 V.00 13 e igual para todos y no caben exclusiones no autorizadas expresamente por el precepto normativo. (Negrilla de la Sala)

Así pues, esta Sala comparte dicha postura de la Alta Corte, pues es claro que cuando una persona es beneficiaria del régimen de transición, le es aplicable todo lo consagrado en la ley 100 de 1993, respetándosele del régimen anterior lo concerniente a la edad, tiempo y monto; por tal razón, es que es con base en la ley 100 de 1993, que se deben tener en cuenta todas las cotizaciones realizadas tanto en el sector público como el privado para efectos de liquidar el IBL.

Una vez realizadas las operaciones aritméticas del caso, tomando para ellos los IBC de los últimos 10 años efectivamente cotizados, esto es desde el año 2019 para atrás, y no desde febrero del 2000 como lo realizó el juez, se tiene que para el año 2019, el actor debió recibir una mesada pensional por valor de **\$906.481**, y no de \$1'180.975 como lo dijo el juez, ya que se repite, se deben tener en cuenta todas las semanas cotizadas por el demandante, y no solo hasta el año 2000, y por ende, también varía el índice final que se debe tomar para liquidar la prestación económica.

Así las cosas, esta Sala realizó la liquidación del retroactivo y reajuste pensional, comprendido entre el 1º de noviembre de 2019 y solo hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta los siguiente valores y razones: para el año 2019, se tomará una mesada pensional por valor de \$906.481; para el 2020 de \$940.927; para el año 2021 de \$956.076; y para el año 2022 de

\$1'009.808; y teniendo en cuenta que para el año 2023, da una suma inferior al salario mínimo legal por valor de \$1'142.294, se tomará el salario mínimo para esta calenda por valor de \$1'160.000; todo lo anterior arroja un total de **\$8'207.147**. Por tal razón, la sentencia merece ser **MODIFICADA** en tal sentido.

A partir del año 2023, COLPENSIONES, deberá seguir reconociendo la mesada pensional en un salario mínimo como aparentemente lo debe estar realizando.

iii. Intereses moratorios.

En lo que tiene que ver con la inconformidad presentada por la parte actora en lo que respecta a los **intereses moratorios**, es claro que éstos fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo por la obligación que tiene la entidad de seguridad de reconocer las mesadas pensionales oportunamente, con independencia de la buena o mala fe en el comportamiento en que haya incurrido el deudor; así lo ha venido sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como son la SL5079-2018 y SL4322-2022, no obstante, en la primera de ellas, establecido en qué casos no proceden los mismos, como se pasará a ver:

“1. Cuando la negativa al reconocimiento pensional cuente con plena justificación y/o un respaldo normativo que en principio regulara la situación.

La Sala ha establecido que en aquellos eventos en que la negativa de las entidades para reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentre plena justificación, bien sea porque tenga el respaldo normativo que en un comienzo regulara la situación o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado pueda darle los jueces, no hay lugar a condenar a los citados intereses moratorios. Entre otras, en la sentencia CSJ SL704-2013 al respecto se adoctrinó:

La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

2. Cuando se otorga una pensión en virtud de un cambio de criterio jurisprudencial.

En aquellas situaciones en que se otorgue una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial, los intereses moratorios no tienen cabida, ya que la entidad obligada a conceder la pensión, no podía prever el nuevo entendimiento o interpretación dado a la norma que regula el derecho pensional solicitado.

Así se dejó establecido, entre otras, desde la sentencia CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016, donde se manifestó:

*«Ahora, si bien esta Sala ha indicado que **excepcionalmente la entidad se encuentra exonerada del pago de los citados intereses**, ello solo es posible en casos precisos y excepcionales, bien sea cuando la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación obedeció a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podía prever (ver sentencias CSJ SL 787-2013, rad.43602; SL10504-2014, rad.46826; SL13076-2014, rad.55252; SL10637-2015, rad. 43396 y SL15975-2015), presupuestos que no son predicables en el presente asunto dados las circunstancias fácticas y fundamentos jurídicos que rodearon el asunto, y las razones esbozadas por el ISS para negar la concesión del derecho en la Resolución N° 060563 de 2009. (Negrilla de la Sala).*

Así las cosas, en el presente caso, COLPENSIONES, actuó acorde a la ley, ya que como lo manifestó el juez, la entidad accionada fue exegética al aplicar con rigurosidad los 15 años de servicio para ser beneficiario del régimen de transición, y que con base en criterios jurisprudenciales ha variado, siendo más lapso, al permitir adquirir el derecho con 750 semanas cotizadas; por lo anterior, no es dable el reconocimiento de los intereses solicitados.

Debido a lo anterior, es de recibo la indexación en virtud del envilecimiento de la moneda, pues entre la fecha de exigibilidad de la condena aquí liquidada y el futuro día de pago de la reliquidación, media un lapso considerable, y para tal efecto COLPENSIONES deberá pagar dicha prestación debidamente indexada, como lo dijo el juez, por lo que se **CONFIRMARÁ** la sentencia en tal sentido.

iv. Costas procesales.

En lo que tiene que ver con la condena en costas a COLPENSIONES, debe indicarse que la conducta subjetiva de las partes no es un elemento a tener cuenta para la imposición de costas, dado que éstas están ligadas a una circunstancia objetiva que es la pérdida del proceso, y, sin lugar a dudas COLPENSIONES es una parte vencida dentro del proceso, conforme lo establece el artículo 365 del Código General del Proceso, y en ese sentido habrá lugar a la imposición de las costas, tal y como lo dijo el juez, debiéndose **CONFIRMAR** la sentencia en tal aspecto.

Corolario de todo lo dicho, es que la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta, debe ser **MODIFICADA** y **CONFIRMADA**, conforme se explicó en párrafos precedentes.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. En esta instancia no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **MODIFICA** la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocidas, para en su lugar **CONDENAR** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **MIGUEL AUGUSTO JARAMILLO DE LOS RÍOS**, por concepto de retroactivo pensional, causado desde el 1° de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2022, la suma de **\$8'207.147**, con la obligación de seguir reconociendo a partir del año 2023,

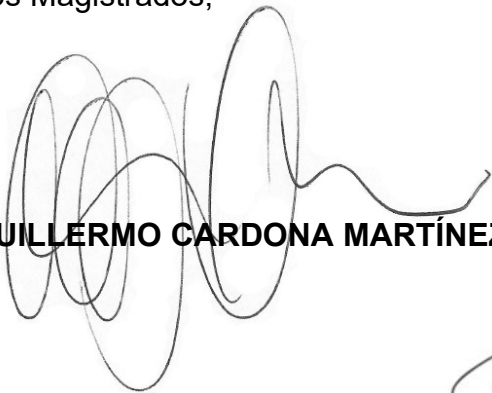
una pensión por el salario mínimo legal mensual vigente, como supuestamente lo debe estar realizando.

SEGUNDO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

TERCERO: Las costas procesales como se dejó dicho en la parte motiva de la sentencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Miguel Augusto Jaramillo de los Ríos
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-005-2020-00393
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 16 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 16 de marzo de 2023 a la 5:00 pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO